

Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial: San Salvador, a las doce horas con cuarenta y siete minutos del doce de agosto del de dos mil veinte.

Por recibido mensaje enviado a las 18:57 horas del 11/8/2020 al Foro de la Solicitud del Portal de Transparencia del Órgano Judicial por la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Considerandos.

I. 1. En vista que el mensaje descrito en el prefacio de esta resolución fue remitido en hora inhábil, se tiene como presentado el 12/8/2020, lo anterior de conformidad con el art. 81 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

2. En fecha 10/8/2020 la peticionaria presentó a través del Portal de Transparencia la solicitud de información 531-2020, en la cual requirió: “Resolución de amparo de de la alcaldía de Santa Tecla 247-2020 y 248-2020”.

3. Por resolución UAIP/531/RPrev/1139/2020 del 10/2/2020 se previno a la usuaria para que en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente a su notificación delimitara la fecha de emisión o el periodo de vigencia de la información que solicitaba; asimismo que debía señalar el tipo de resoluciones (admisión, prevención, sentencia definitiva, interlocutorias con fuerza de definitiva, etc) que pretendía obtener en los procesos que señalaba ref. (247-2020 y 248-2020).

En ese sentido, a través del mensaje descrito en el prefacio de esta decisión la peticionaria respondió la prevención en los términos siguientes:

“Se trata de la petición de resolución de examen de admisión de la demanda de Amparo, interpuesta por el Licenciado XXXXXXXXXXXXXXXX, marcada con el número de Ref. 247-2020, emitida por la Sala de lo Constitucional, el día 22 de julio de 2020. Asimismo solicito la resolución del examen de admisión de la demanda de Amparo, interpuesta por el Licenciado XXXXXXXXXXXXXXXX, con número de Ref. 248-2020, emitida por la Sala de lo Constitucional, el día 22 de julio de 2020.

II. Respecto a lo requerido por la usuaria y subsanación antes descrita se hacen las acotaciones siguientes:

1. El objeto de la Ley de Acceso a la Información Pública -en adelante LAIP-, según lo establecido en su art. 1 es la de “garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las Instituciones del Estado”. Y, según el art. 4, letra a) de ese mismo cuerpo normativo, la información pública se rige por el principio de máxima publicidad, que exige que la información en poder de los entes obligados sea pública y su difusión sea irrestricta, salvo excepciones expresamente establecidas en la ley.

2. El art. 10 de la LAIP, establece el tipo de información que se considera oficiosa, o mejor dicho que se debe dar a conocer al público sin necesidad de una solicitud de acceso, y el art. 13 de la misma ley, establece qué tipo información debe darse a conocer a todas las personas por parte del Órgano Judicial.

3. Pese a todo ello, no toda petición de información realizada por la ciudadanía puede ser evacuada; de modo tal que, jurisprudencialmente se han construido límites para la obtención de la información por esta vía administrativa, en los términos prescritos en la LAIP, haciéndose una distinción entre información de índole administrativo y la de carácter jurisdiccional.

II. 1. Al respecto, en las sentencias de 6/7//2015 y 29/9/2015, pronunciadas en los Amparos 482-2011 y 533-2013 respectivamente y en la sentencia de 20/8/2014, Inc. 7-2006, se indicó que a partir de una interpretación sistemática de los arts. 110 literal “e” de la LAIP y 9 del Código Procesal Civil y Mercantil se determina que hay una intención manifiesta de que la información relativa a los procesos jurisdiccionales se obtenga de acuerdo con las normas que rigen a estos, y no con las normas estatuidas por la LAIP. En este sentido, debe entenderse que el acceso a la información pública que facilita la normativa en mención, únicamente alude al ámbito administrativo de los juzgados y tribunales, no al jurisdiccional.

En este contexto, en la jurisprudencia aludida se estableció que: “... **la información jurisdiccional es todo dato que constata la existencia o realización de un acto que tiene efectos o consecuencias directas o indirectas en un proceso o procedimiento tramitado ante autoridades que ejercen jurisdicción, tales como fases del proceso, demandas, informes, audiencias, incidentes, recursos, decisiones, entre otros.** Este tipo de información alude a los actos por medio de los cuales se inicia, impulsa y finaliza un proceso.

Así las cosas, la idea de información administrativa resulta excluyente: será administrativa toda información que no sea jurisdiccional o que no tenga una conexión con los actos que producen consecuencias en los procesos o procedimientos judiciales, tales como el contenido de los libros administrativos, agendas de sesiones, estadísticas, número de referencia de proceso en trámite o fenecidos, etc. (...) el acceso a la información pública que facilita la LAIP únicamente alude al ámbito administrativo de los juzgados y tribunales, no al jurisdiccional, pues resulta factible obtener información sobre este último de conformidad con las reglas que rigen la materia correspondiente...” (sic). (Resaltados agregados)

Sobre el efecto vinculante de las decisiones de la Sala de lo Constitucional, en la improcedencia del 25/9/2014, emitida en el proceso de hábeas corpus 445-2014, la cual puede ser consultada directamente en el Portal del Centro de Documentación Judicial, por ser información de carácter oficiosa, se “... ha afirmado la obligación de los aplicadores jurisdiccionales o administrativos de cumplir con lo ordenado en las reglas adscritas a las disposiciones constitucionales, así como con lo dispuesto en la interpretación de los contenidos de los derechos fundamentales efectuada a través de los procesos constitucionales, entre ellos, los de amparo y hábeas corpus...” (itálicas agregadas).

En dicha decisión, la Sala de lo Constitucional indicó que sus resoluciones y fallos: “... no pueden entenderse como documentos conformados por segmentos aislados e incoherentes, carentes de efectos obligatorios, sino como un todo armónico y unitario en el que se reflejan y concretiza la actuación jurisdiccional y la fundamentación y decisión del tribunal, todo lo cual está dotado de plena obligatoriedad para las partes procesales; y en el caso de las resoluciones y fallos de la Sala de lo Constitucional, *estos tienen efectos vinculantes jurídicamente para las autoridades*” (itálicas y resaltados agregados).

2. En conclusión, la jurisprudencia constitucional ha delimitado “los ámbitos competenciales que corresponden al Oficial de Información de la Corte Suprema de Justicia y los que atañen a esta Sala. (...) [L]o que se ha hecho es aclarar que la información administrativa que corresponda al Órgano Judicial deberá ser tramitada ante el primero, mientras que la información jurisdiccional ante los respectivos tribunales...” (sic).

3. En esa línea argumentativa el Instituto de Acceso a la Información Pública por resolución con referencia NUE 160-A-2015 (MV), del 17/5/2016, sostuvo que “... el art. 110

letra “f” de la LAIP reconoce la vigencia de todas aquellas normas contenidas en leyes procesales relativas al acceso de expedientes durante el período de su tramitación. En tal sentido, y en concordancia con lo resuelto por la Sala de lo Constitucional en la sentencia de inconstitucionalidad 7-2006 y 6-2012, debe interpretarse que el legislador deliberadamente estableció que el acceso a los expedientes relacionados con normas procesales se rige por éstas y no por lo dispuesto en la LAIP...”.

4. Asimismo, el mencionado Instituto por resolución con referencia NUE 144-A-2017, del 12/6/2017, determinó que si bien la LAIP le otorga facultades para dirimir controversias “entre los entes obligados y la población peticionaria en general, dichas controversias deben versar sobre temas de acceso a la información pública para que se active la competencia objetiva y así conocer de los casos que se presentan en esta instancia”; por tanto, declaró improponible el recurso de apelación interpuesto por un ciudadano contra resolución emitida por esta Unidad de Acceso, respecto a información relacionada con un expediente judicial.

III. En ese orden de ideas, en el presente caso la ciudadana en concreto solicitó inicialmente: “Resolución de amparo de de la alcaldía de Santa Tecla 247-2020 y 248-2020”, posteriormente en la subsanación estableció que requiere; “...resolución de examen de admisión de la demanda de Amparo, interpuesta por el Licenciado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, marcada con el número de Ref. 247-2020, emitida por la Sala de lo Constitucional, el día 22 de julio de 2020. Asimismo solicito la resolución del examen de admisión de la demanda de Amparo, interpuesta por el Licenciado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con número de Ref. 248-2020, emitida por la Sala de lo Constitucional, el día 22 de julio de 2020”.

Tales peticiones persiguen conocer resoluciones dictadas en una de las etapas de los procesos que alude, y conforme a los criterios sostenidos por la Sala de lo Constitucional y el Instituto de Acceso a la Información Pública, son de carácter jurisdiccional y por consiguiente, únicamente puede ser proporcionada por la entidad jurisdiccional competente.

Por tanto, la solicitud de información planteada por la ciudadana no es competencia de esta Unidad, en tanto escapa al ámbito de aplicación de la LAIP, ya que se trata de información propiamente jurisdiccional.

Con base en los razonamientos precedentes y los arts. 71, y 72 de la LAIP, se resuelve:

1. *Declárese* incompetente esta Unidad para tramitar la solicitud presentada por la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por ser la información requerida de índole jurisdiccional.

2. *Requiera* la peticionaria su solicitud directamente ante la instancia jurisdiccional correspondiente.

3. *Notifíquese*



Lic. Giovanni Alberto Rosales Rosagni
Oficial de Información Interino del Órgano Judicial

NOTA: La Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial ACLARA: que la presente es una copia de su original, a la cual le fueron eliminados ciertos elementos para la conversión en versión pública de conformidad con los artículos 30 y 24 letra c) de la Ley de Acceso a la Información Pública.